

022/2025

I

El proyecto de Orden tiene por objeto determinar la composición, organización y funciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), así como la regulación del procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla. Asimismo, se establece la regulación de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y el procedimiento para su obtención en dichas Ciudades Autónomas.

Por tanto, la norma desarrolla el ejercicio por parte de las Direcciones Territoriales del Imserso en Ceuta y Melilla de las competencias que en materia de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad les corresponde, incluyendo el desarrollo procedimental necesario para su gestión, y la expedición de la correspondiente tarjeta acreditativa. Con ello se pretende garantizar una aplicación uniforme del procedimiento regulado por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, en el ámbito territorial de las ciudades mencionadas, y asegurar los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.

El texto que se informa consta de una parte expositiva, veintiséis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y un anexo.

Tras definirse en el artículo 1 el objeto de la norma, centrado en determinar la composición, organización y funciones de los equipos multiprofesionales encargados del reconocimiento del grado de discapacidad en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como en regular el procedimiento de valoración y la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, el artículo 2 establece las competencias de las Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) como órganos responsables de su aplicación en dichos territorios.

El artículo 3 regula la estructura, funciones y dependencia de los equipos multiprofesionales, quienes actuarán conforme al Real Decreto

888/2022, de 18 de octubre, y se encargan de valorar las situaciones de discapacidad, proponer la revisión del grado, determinar la necesidad de apoyo para la vida diaria y emitir otros informes técnicos. El artículo 4 concreta que la evaluación y calificación se realizará mediante los baremos previstos en los anexos del citado Real Decreto. El artículo 5 detalla el procedimiento para la emisión de otros informes que les sean legalmente atribuidos.

Los artículos 6 a 13 desarrollan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad, mientras que los artículos 14 a 26 regulan todos los aspectos relativos a la expedición, contenido, renovación y efectos de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. **La disposición adicional primera prevé expresamente la aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos personales a los procedimientos que regula la Orden, en los términos que se expone.**

Habida cuenta del objeto del proyecto que se informa, tanto en su articulado como en el anexo incorporado a la misma, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos

personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

El art. 4.15 del RGPD define datos de salud como datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.

El art. 9.1 del RGPD prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, y *datos relativos a la salud* o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

Únicamente dicha prohibición no será aplicable cuando se dé alguna de las circunstancias del apartado 2, y entre ellas cuando se den las causas de los apartados b), y g) a j) del mismo (*que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social; que el tratamiento sea necesario por razones de un interés público esencial; que sea necesario por razones de la salud del trabajador o asistencia sanitaria o social; por razones de interés público en el ámbito de la salud pública; o por razones de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos*). Todo ello, en los términos y con las condiciones que se establecen en dicho artículo 9 del RGPD.

Específicamente, la **letra h)** del artículo 9.2 RGPD, señala que lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo no será aplicable cuando:

“h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, **prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social**, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3; (la negrita es nuestra)
(...)”

A su vez, la base de legitimación para el tratamiento de datos previsto en la Orden se encuentra en el artículo **6.1, apartados c) y e) del RGPD**, que establecen que el tratamiento es lícito cuando (i) es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o bien cuando (ii) es necesario para el cumplimiento de una misión realizada

en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. En este contexto, la prohibición inicial para el tratamiento de datos sobre “prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social”, considerados de especial protección, se levanta en el artículo 9.2.h) del RGPD, al ser necesario dicho tratamiento para la gestión de servicios para *las personas discapacitadas*, garantizándose las medidas necesarias de seguridad y confidencialidad. Una vez levantada la interdicción, la base legal legitimadora de dicho tratamiento se contiene en el artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD.

El proyecto sometido a informe desarrolla parcialmente las previsiones del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que incorpora el concepto de discapacidad y de persona con discapacidad de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la normativa que regula el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de los Servicios Sociales y de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

De tal suerte, en lo relativo a las ciudades de Ceuta y Melilla, se plasman los criterios comunes para la aplicación de Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, dimanante de las normas con rango de ley formal referidas *ut supra*.

Los artículos 48, 49 y 50 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, disponen que:

Artículo 48. Derecho a la protección social.

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a unos servicios y prestaciones sociales que atiendan con garantías de suficiencia y sostenibilidad sus necesidades, dirigidos al desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad, incrementando su calidad de vida y bienestar social.

Artículo 49. Criterios de aplicación de la protección social.

1. Los servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias podrán ser prestados tanto por las administraciones públicas como por entidades sin ánimo de lucro a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos

necesarios.

En todo caso, las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente, conforme a lo establecido en el artículo 10.

2. La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su entorno geográfico, teniendo en cuenta las barreras específicas de quienes habiten en zonas rurales.

3. Se promoverá la participación de las propias personas con discapacidad en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales.

Artículo 50. Contenido del derecho a la protección social.

1. Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a los servicios sociales de apoyo familiar, de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, de promoción de la autonomía personal, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias, de apoyo en su entorno, servicios residenciales, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre.

2. Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta ley, la legislación autonómica podrá prever servicios y prestaciones económicas para las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.

Las transcritas previsiones normativas, establecidas en una norma con rango de ley formal, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (la negrita es nuestra)

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley.**” (la negrita es nuestra)

III

Esta Agencia ha emitido diversos informes en materia de declaración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas afectadas, entre los cuales cabe reseñar los siguientes:

1. Informe 134/2013, referente al Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social.
2. Informe 25/2022, sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
3. Informe 43/2022, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
4. Informe 7/2025, específicamente en el ámbito de Ceuta y Melilla, sobre el proyecto de Orden por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en dichas Ciudades Autónomas.
5. Informe 10/2025, en el que, más recientemente, se analizó el Anteproyecto de Ley por el que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Entre otras cuestiones analizadas, estos informes se han referido a la interpretación de las normas procedimentales sobre reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de las personas afectadas, proporcionando criterios técnicos y jurídicos sobre protección de datos de carácter personal en relación con la materia analizada.

Tal como se ha señalado, la norma que se informa tiene como objetivo principal regular la estructura, el funcionamiento y las funciones de los equipos multiprofesionales responsables de la calificación y el reconocimiento del grado de discapacidad, adscritos al Imsero en Ceuta y Melilla. Esta regulación se enmarca en lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley

General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que establece el procedimiento para dicho reconocimiento.

Asimismo, la norma regula el procedimiento específico de valoración del grado de discapacidad en el ámbito territorial de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. También establece el régimen aplicable a la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y su procedimiento de obtención en estos territorios. En conjunto, el contenido del texto constituye un desarrollo normativo centrado en aspectos organizativos y procedimentales, limitado al ámbito territorial de Ceuta y Melilla.

Del articulado de la norma se extrae la existencia de diversos tratamientos de datos de carácter personal que se producirán, de una parte, a consecuencia de las previsiones de su articulado, y, de otra parte, como resultado de la recogida de dichos datos a través del anexo de la Orden.

Así, en primer lugar, de acuerdo con el Capítulo II del proyecto (artículos 3 a 5), el tratamiento de datos personales por parte de los Equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad se enmarca dentro de sus funciones técnicas establecidas legalmente. Estos equipos, adscritos al Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla, son responsables de valorar las situaciones de discapacidad y emitir dictámenes sobre el grado de esta. Para cumplir con estas funciones, deben recabar y manejar datos personales y de salud de las personas evaluadas, **siempre bajo el principio de consentimiento expreso** y previo de la persona interesada o de su representante legal, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de informes de aptitud para el diseño de itinerarios laborales.

Durante el procedimiento de evaluación, los datos son obtenidos mediante examen presencial, por informe o de forma telemática, garantizando en todo momento la accesibilidad universal y la protección del entorno personal del solicitante. En situaciones especiales —como problemas de movilidad o riesgos sanitarios—, se permite la evaluación no presencial, siempre que **la información recabada sea suficiente y pertinente** para emitir una valoración ajustada. La evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado se efectuará por los equipos multiprofesionales mediante la aplicación de los baremos establecidos en los anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.

Finalmente, todos los datos tratados son incluidos en un dictamen propuesta que contiene información sensible, como diagnósticos, puntuaciones, barreras ambientales y otras variables que afectan a la autonomía personal.

Del análisis que se realiza, se extrae que las previsiones anteriores **resultan conformes** tanto con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, como **con la normativa de protección de datos**, adecuándose, muy especialmente, a lo dispuesto en los artículos 5 —Principios relativos al tratamiento—, 6.1 —Licitud del tratamiento (especialmente en lo relativo al consentimiento)—, 13 —Información que debe facilitarse al interesado—, y 32 —Seguridad del tratamiento— del Reglamento general de protección de datos.

Por otra parte, el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad (Capítulo III —artículos 6 al 13—) se inicia a instancia de la persona interesada o de quienes legalmente puedan representarla (art. 6.1), mediante la presentación de una solicitud que incluye datos personales, médicos y sociales sensibles. Estos datos deben ser tratados conforme a la normativa vigente de protección de datos, con observancia de lo dispuesto en el RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. La solicitud se puede presentar preferentemente por vía electrónica, garantizándose la seguridad en la transmisión (art. 6.2), e incluye diverso tipo de documentos, entre los que se incluyen los informes médicos (art. 6.3), considerados especialmente protegidos.

Se prevé la consulta directa de datos por medios electrónicos por parte del Imerso, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá aportar la documentación directamente (art. 6.4). Además, se garantiza el derecho de acceso al estado de tramitación del expediente mediante la sede electrónica, cumpliendo con los principios de transparencia y control por parte del titular de los datos.

Durante el procedimiento, la valoración se realiza por un equipo multiprofesional (art. 8), que puede actuar incluso por medios telemáticos o por informe, lo que exige garantías específicas en cuanto a confidencialidad y seguridad de la información. La resolución se notifica al interesado (art. 9), debiendo recogerse de manera clara la información relevante, incluido el plazo para revisión. Finalmente, la revisión del grado puede realizarse de oficio o a petición de la persona interesada (art. 11), lo que implica un nuevo tratamiento de datos personales.

Según se observa, en todo el procedimiento previsto en el Capítulo III de la Orden, se aplica el **principio de minimización de datos, necesidad y proporcionalidad**, exigiendo solo la información necesaria para cada fase, cumpliéndose así lo previsto en el art. 5 RGPD —Principios relativos al tratamiento—. Asimismo, se respeta el **principio de licitud y legitimidad en el tratamiento de datos** —artículo 6.1, letra e) RGPD— por parte de la administración pública, con base en el interés público y el ejercicio de poderes públicos.

El Capítulo IV regula la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Dicha tarjeta constituye un documento personal e intransferible, cuya función esencial es la de acreditar oficialmente el grado de discapacidad ante terceros. Solo podrán ser titulares de dicha tarjeta aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que residan de forma efectiva en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla (habida cuenta del ámbito territorial de la Orden).

Respecto del procedimiento de solicitud y tramitación, este debe ser iniciado por la persona interesada o, en su defecto, por quien ostente su representación legal o actúe conforme a las medidas de apoyo debidamente reconocidas. La solicitud podrá presentarse tanto por vía electrónica como en soporte papel, debiendo ir acompañada de la documentación identificativa, la acreditación de la residencia efectiva en Ceuta o Melilla y, en su caso, de los documentos que justifiquen la representación legal. El Imserso podrá recabar los datos necesarios a través de plataformas de interoperabilidad, salvo oposición expresa de la persona interesada, en cuyo caso deberá aportar los documentos por medios manuales. **Esta previsión se ajusta a los principios de minimización de datos y consentimiento recogidos en los artículos 6 y 7 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).**

En lo relativo al reconocimiento de resoluciones emitidas por otras Comunidades Autónomas, se contempla la posibilidad de solicitar la tarjeta acreditativa en Ceuta o Melilla por parte de personas que ya dispongan de un grado de discapacidad reconocido por otra Comunidad, siempre que se produzca el traslado formal del expediente correspondiente. **Esta medida garantiza el principio de exactitud y actualización de los datos, conforme al artículo 5 del RGPD.**

Por lo que respecta al órgano competente y al plazo de emisión, la Dirección Territorial del Imserso en la ciudad autónoma competente será la encargada de expedir la tarjeta en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud. La existencia de este plazo y la utilización de medios electrónicos para la notificación de la resolución **aseguran el respeto a los principios de transparencia y derecho a la información, de acuerdo con los artículos 13 y 14 del RGPD.**

En cuanto al tipo y contenido de la tarjeta, esta podrá emitirse en formato físico o digital, previendo también su adaptación en braille para personas con discapacidad visual. La tarjeta recogerá los datos identificativos básicos, el grado de discapacidad reconocido, la vigencia del mismo y las indicaciones pertinentes en materia de confidencialidad. A tal efecto, según se extrae, por el órgano consultante **se implementarán medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos personales sensibles, conforme al artículo 32 del RGPD.**

En relación con las modificaciones, duplicados y reposiciones, la normativa prevé la expedición de una nueva tarjeta en caso de cambio en el grado de discapacidad, pérdida o deterioro de la misma. En situaciones de robo, será imprescindible presentar una denuncia ante la autoridad competente. **Este procedimiento garantiza el control de duplicados, limitando así el riesgo de fraude.**

Finalmente, en lo que respecta a la vigencia y causas de cancelación, la tarjeta podrá tener carácter temporal o permanente, según lo establecido en la resolución administrativa que reconozca el grado de discapacidad. No obstante, se establece su cancelación en casos como el fallecimiento del titular, la pérdida o extravío no notificados, el uso fraudulento o cualquier otra circunstancia que implique la pérdida de la finalidad del documento. Con ello **se asegura la supresión de datos personales una vez dejen de ser necesarios, conforme al principio de limitación del plazo de conservación recogido en el artículo 5.1.e) RGPD.**

IV

Según se viene analizando, en la Orden que se informa se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, muchos de ellos referidos a categorías especiales de datos, como, entre otros, los datos de salud, de discapacidad y dependencia.

Pues bien, en estos casos, que implican el tratamiento de categorías especiales de datos personales, el Tribunal Constitucional en su sentencia 76/2019 —FJ 6 y 8—, **destaca la imperiosa necesidad de recoger en la ley habilitante las correspondientes garantías:**

“c) La necesidad de disponer de garantías adecuadas es especialmente importante cuando el tratamiento afecta a categorías especiales de datos, también llamados datos sensibles, pues el uso de estos últimos es susceptible de comprometer más directamente la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.”

La exigencia de especial protección de esta categoría de datos está prevista en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981 (instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985), cuyo artículo 6 establece lo siguiente: «Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. [...]» Esa exigencia ha sido igualmente afirmada por la Agencia Española de Protección de Datos. De acuerdo con el preámbulo de su

Circular 1/2019, esas garantías adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de los afectados «adquieren una especial relevancia tanto por la importancia de los datos personales objeto de tratamiento como por tratarse de tratamientos a gran escala de categorías especiales que entrañarán un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas difícilmente mitigable si no se toman medidas adecuadas». Asimismo, como ya se indicó en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, el Reglamento (UE) 2016/679 reitera la exigencia de que el legislador que regule el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas establezca dichas garantías adecuadas [artículo 9.2.g) y considerando 56].

Las garantías adecuadas deben velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención. La naturaleza y el alcance de las garantías que resulten constitucionalmente exigibles en cada caso dependerán de tres factores esencialmente: el tipo de tratamiento de datos que se pretende llevar a cabo; la naturaleza de los datos; y la probabilidad y la gravedad de los riesgos de abuso y de utilización ilícita que, a su vez, están vinculadas al tipo de tratamiento y a la categoría de datos de que se trate. Así, no plantean los mismos problemas una recogida de datos con fines estadísticos que una recogida de datos con un fin concreto. Tampoco supone el mismo grado de injerencia la recopilación y el procesamiento de datos anónimos que la recopilación y el procesamiento de datos personales que se toman individualmente y no se anonimizan, como no es lo mismo el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, que el tratamiento de otro tipo de datos.

El nivel y la naturaleza de las garantías adecuadas no se pueden determinar de una vez para todas, pues, por un lado, deben revisarse y actualizarse cuando sea necesario y, por otro lado, el principio de proporcionalidad obliga a verificar si, con el desarrollo de la tecnología, aparecen posibilidades de tratamiento que resultan menos intrusivas o potencialmente menos peligrosas para los derechos fundamentales. (FJ.6)

[...]

(iv) Por último, debemos recordar que el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las

pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige. (FJ.8)”

Con el fin de dar adecuado cumplimiento a la normativa y jurisprudencia citada, esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el prelegislador, en aquellos casos en que los tratamientos tienen **como base jurídica el art. 6.1.c) o e) del RGPD** (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal o una misión de interés público), y venga establecida por el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, como es el caso de las operaciones de tratamiento reguladas por el proyecto de Orden que se informa, o cuando el mismo implique el tratamiento de categorías especiales de datos personales, **haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD, de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la norma (ley, real decreto, orden, etc.), quien realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica.**

El art. 2.1, letra g), del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo es suficientemente expresivo de la voluntad del legislador de incluir en la MAIN, dentro del concepto “Otros impactos”, el análisis del “impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma”. A saber:

“g) Otros impactos: La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma.”

En este sentido, según se observa, en el apartado III –**ANÁLISIS DE IMPACTOS**– de la MAIN que acompaña al proyecto de Orden que se informa,

se contiene una amplia referencia a diferentes tipos de impacto; sin embargo, por parte del redactor de la norma, **no se ha incorporado a dicho apartado III previsión alguna en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de los afectados.**

Su previsión *permitiría* que los responsables o encargados del tratamiento no tuvieran la obligación de realizar dicha evaluación de impacto de datos personales (EIPD) prevista en el art. 35 RGPD (que el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ha considerado asimismo obligatoria), precisamente por haberse llevado ya a cabo en el seno del *proceso de gestación de la norma de carácter general*.

En este contexto, **la Disposición adicional primera de la Orden prevé expresamente la realización de la mencionada EIPD**, garantizando suficientemente la dignidad y derechos fundamentales de las personas afectadas, en consonancia con el mandato constitucional de respeto a la dignidad humana (artículo 10.1 CE.). Esto es, habida cuenta del tenor literal de la Disposición adicional primera de la Orden, en el presente supuesto **queda garantizada la realización de la EIPD.**

V

Como se viene exponiendo, a consecuencia de las previsiones de la Orden, se realizarán múltiples tratamientos de datos personales, lo que implica su sujeción a la normativa de protección de datos. En este sentido, la información contenida en estos documentos se ajusta a la definición de "dato personal" recogida en el artículo 4.1 RGPD, al tratarse de información relativa a personas físicas identificadas o identificables.

El proyecto sometido a informe incorpora una **Disposición adicional primera**, sobre Protección de datos personales, del siguiente tenor:

“Disposición adicional primera. *Protección de datos personales.*

1. Los empleados públicos que, en razón de la tramitación del expediente de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, conozcan el historial clínico de la persona interesada, quedarán sujetos al deber de secreto. Los tratamientos de datos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales.
2. Se realizará una evaluación de impacto en la protección de datos a fin de adoptar las medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar los derechos y libertades de las personas afectadas, incluidas las que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas

medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos. Esta evaluación de impacto se llevará a cabo en el plazo máximo de 6 meses desde la publicación de esta orden y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas; idoneidad, necesidad y proporcionalidad del mismo; evaluación de los riesgos y medidas para afrontar esos riesgos.”

Pues bien, en relación con el precepto arriba transcrito, se observa **la oportunidad de su modificación o sustitución** por otro más completo y omnicomprendivo que se refiera, en primer lugar, al debido cumplimiento de la normativa sobre protección de datos en todos los aspectos en los que el proyecto de Orden incide en el tratamiento de estos. Así, se sugiere la incorporación de un nuevo artículo al proyecto de Orden, o bien de un nuevo apartado en la Disposición adicional primera, en el que se introduzca un texto más amplio y de aplicación general, que podría ser del siguiente tenor:

“Todos los tratamientos de datos de carácter personal derivados de la aplicación de esta Orden Ministerial, se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal”.

A su vez, también en la citada Disposición adicional primera, o bien en otro artículo del proyecto, se sugiere la introducción de una mención específica a la limitación de la finalidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, garantizando específicamente que estos **no serán objeto de tratamiento para finalidades diferentes a las contempladas en el proyecto, distintas del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.**

En conclusión, una vez valorada positivamente la adecuación general del proyecto de Orden a la normativa de protección de datos, **se sugiere** la modificación de la redacción de la Disposición adicional primera, estructurándola de manera más adecuada, y haciendo mención:

- (i) A la aplicación y cumplimiento de la normativa de protección de datos (en idénticos o similares términos a los que se señalan más arriba).
- (ii) A las obligaciones del personal que lleve a cabo tratamientos de datos en relación con su deber de secreto.

- (iii) Al cumplimiento del principio de limitación de la finalidad.
- (iv) A la consolidación de las previsiones *(ya incorporadas con idéntica dicción al texto de la Disposición adicional primera, en su versión actual)* sobre la realización de una EIDP.

En resumen, se sugiere la siguiente redacción (u otra similar) de la Disposición adicional primera, sobre “Protección de datos personales”, contenida en la Orden que se informa:

“Disposición adicional primera. *Protección de datos personales.*”

- 1. Todos los tratamientos de datos de carácter personal derivados de la aplicación de esta Orden Ministerial, se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal.**
- 2. Los datos de carácter personal recogidos a consecuencia de las previsiones de esta orden no serán objeto de tratamiento para finalidades distintas del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.**
- 3. Los empleados públicos que, en razón de la tramitación del expediente de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, conozcan el historial clínico o social de la persona interesada, quedarán sujetos al deber de secreto.**
- 4. Se realizará una evaluación de impacto en la protección de datos a fin de adoptar las medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar los derechos y libertades de las personas afectadas, incluidas las que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Dichas medidas deberán en todo caso garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos. Esta evaluación de impacto se llevará a cabo en el plazo máximo de 6 meses desde la publicación de esta orden y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas; idoneidad, necesidad y proporcionalidad del mismo; evaluación de los riesgos y medidas para afrontar esos riesgos.”**